

Presupuestos Generales del Estado

El ministro de Economía garantiza el cumplimiento del ANE

Rechazado un fondo de 200.000 millones para garantizar los puestos de trabajo previstos en el Acuerdo Nacional sobre Empleo

SEBASTIAN GARCIA

Nicolás Sartorius, en nombre del Grupo Comunista, propuso que el Parlamento apruebe un fondo de 200.000 millones de pesetas para garantizar las previsiones de creación de trabajo del Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE), argumentando que la política del Gobierno no logrará esos objetivos. El ministro de Economía rechazó la propuesta por entender que ese fondo debería financiarse con mayor presión fiscal o aumentando la inflación.

La intervención del diputado comunista para defender la enmienda de su grupo a la totalidad del proyecto de Presupuestos dio origen a lo que el propio Sartorius calificó de diálogo de sordos, ya que, mientras el representante del PCE insistía en que nadie se cree que se pueda llegar a un crecimiento del 3% del producto interior bruto (PIB), y, por tanto, a crear 350.000 puestos de trabajo, el Gobierno y UCD sostuvieron que el objetivo se cumplirá.

Sartorius comenzó su intervención advirtiendo que en este debate no hay ninguna clase de *tongo*, y centró sus argumentos en el problema del paro, que si no se resuelve «lo pasaremos muy mal todos», para acusar después al Gobierno de que con los Presupuestos en estudio no se cumplirán los compromisos de creación de empleo.

El problema, señaló, no puede verse separado de la política, y en concreto de la negativa del Gobierno de Calvo Sotelo a contar con las demás fuerzas políticas, ya que el Ejecutivo sólo accedió a la llamada concertación, que más bien ha naufragado, y al ANE, cuyo mérito fundamental es de los sindicatos. El diputado comunista remarcó que todos pusieron mucho esfuerzo y patriotismo para hacer una política de solidaridad, que estos Presupuestos no recogen.

El sacrificio de los trabajadores y las contrapartidas

Frente a los sacrificios que los trabajadores hacen al permitir que bajen sus salarios en favor del margen empresarial, agregó Sartorius, los sindicatos esperan las contrapartidas contenidas en el ANE. Algunas cuestiones concretas están recogidas en los Presupuestos, pero «tenemos muy serias dudas de que se creen los puestos de trabajo proyectados, porque las previsiones se han incumplido sistemáticamente en los últimos años», afirmó. El diputado comunista criticó

también la política de reconversión industrial, que, a su juicio, se está limitando a poner parches, y afirmó que las inversiones crecerán en 1982 menos que este año, de forma que no compensarán el sacrificio de los salarios, lo que puede llevar a una baja peligrosa del consumo. Criticó duramente a la CEOE, a la que acusó de no haber querido nunca el ANE, y pidió que se garantice que éste será cumplido por todas las partes firmantes. También pidió que se reparta mejor el trabajo existente.

Finalmente, calificó de regresivas las previsiones fiscales de los Presupuestos y advirtió, con palabras dramáticas, que si no se garantiza el cumplimiento del ANE, «no habrá fuerza moral para pedir a los trabajadores que hagan sacrificios y, por tanto, se habrá dado un golpe mortal a la política de acuerdo y, en suma, a las instituciones democráticas».

El ministro de Economía, Juan Antonio García Díez, replicó brevemente que el Gobierno está decidido a cumplir totalmente sus compromisos, y por eso en los Presupuestos están recogidos los que atañen a ellos, y afirmó que el diputado comunista no había dado argumentos que demuestren que no se van a cumplir las previsiones de crecimiento del PIB. Rechazó el fondo de garantía propuesto, «porque eso sí sería poner el pie en el cuello del ANE, ya que estrangularía la inversión privada o relanzaría la inflación, acabando con nuestras posibilidades en la exportación». Finalmente pidió que no se amenazase con que «ya veremos qué ocurre en los convenios».

Santiago Rodríguez Miranda, por UCD, reafirmó los argumentos del ministro, y agregó que no se puede dar la impresión de que el Gobierno no quiere cumplir el ANE, detallando las cuestiones previstas en los Presupuestos.

García Díez replicó, a su vez, que la mejor garantía para el ANE es una política seria.



Santiago Carrillo —a la izquierda— y Jordi Solé Tura escuchan a Nicolás Sartorius en un momento del Pleno del Congreso.

Ambigua oposición de Minoría Catalana al proyecto de ley

CARLOS GOMEZ

«De entrada, no». Con esta frase, tomada de la campaña socialista sobre el ingreso de España en la OTAN, Ramón Trias Fargas, en nombre de Minoría Catalana, inició el turno de intervenciones en contra del proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 1982, en la segunda jornada de debates en el Pleno del Congreso. La ambigüedad del lema, irónicamente escogido por Trias, dejaba en el aire la duda de si a la hora de votar las enmiendas a la totalidad, Minoría Catalana lo haría al lado del Gobierno o en contra del mismo.

Ramón Trias centró sus críticas fundamentalmente en las previsiones de déficit público, en la financiación de éste y en las medidas fiscales, además de insistir en la necesidad de que se arbitren mayores inversiones para Cataluña. Dijo que estos son unos presupuestos elaborados sin que exista un plan económico del Gobierno; el sector público crece por inercia e incompetencia; que se incrementa el déficit sin compensaciones técnicas que palien sus efectos para la empresa privada, y que se incrementa la presión fiscal sobre la inversión privada y sobre las clases más humildes.

Luis Gámir, en nombre de UCD, replicó —sin contestarle— al diputado de Minoría Catalana. Gámir expuso ante el pleno una lección académica sobre las diferencias entre el paro *keynesiano* y el paro neoclásico; aseguró que los presupuestos hacían compatible la lucha contra la inflación, la política fiscal y las medidas contra el paro, e insistió en la interdependencia de nuestra economía con las economías de los países occidentales.

Ramón Tamames, por el Grupo Mixto, defendió a continuación su enmienda a la totalidad. Desmontó puntualmente, en su intervención, las afirmaciones del presidente Calvo Sotelo la víspera. Tamames rebatió la acción nuclear, afianzada según Calvo Sotelo, poniendo en duda su bondad y recordando la paralización de Almaraz y Lemóniz. Recordó que la disminución en un punto de la inflación supone 200.000 parados más y el encarecimiento del dinero; manifestó que no hay una política de reconversión industrial y dijo que el INI, en contra de las afirmaciones del presidente, está en franca bancarrota, y que por ello se tiene que recurrir a la deuda para financiarlo. Dudó de las intenciones del Gobierno en reformar la Seguri-

dad Social (recordó la dimisión de José Varea, que presuntamente abandonó la misma por *mirarse poner las cuentas rojas*), y dijo que lo único que de UCD es prepararse con el ánimo de hacer dimitir a Calvo Sotelo, haciendo dimitir a Calvo Sotelo y elaborando un proyecto de la ley electoral para convocar elecciones. Añadió que la economía se encuentra en una situación muy grave, sin que el Gobierno haga nada ni por ningún horizonte de futuro.

José Manuel García Maestre, en nombre de UCD, descalificó las palabras de Tamames por no haberse atenido al contenido de los presupuestos, y reiteró los puntos ya expuestos por Calvo Sotelo. Juan María Bandrés, de Euzko Ezkerra, pidió también la dimisión de los presupuestos al Gobierno por la inexactitud de las previsiones económicas, por la regresividad de las modificaciones fiscales y por una presunta discriminación en inversiones por el País Vasco con respecto a Navarra y al resto de España.

Municipios y fondo de intercompensación

Ernest Lluch, por el PSC-PSOE, circunscribió sus críticas a las cuestiones municipales y al fondo de intercompensación interterritorial, denunciando una exposición de los presupuestos dedicados por los municipios a la inversión, al gasto de personal y a la compra de bienes y servicios. Estos porcentajes, comparativamente con los del resto de España, muestran un mayor incremento en inversiones, un menor crecimiento en salarios y una fuerte reducción en las adquisiciones de bienes y servicios. Jaime Gañanós, titular de Hacienda, replicó al diputado socialista, recordándole que la mayor financiación de la Seguridad Social y de las subvenciones de desempleo incurrían en el Estado, que tiene que asumir estas cargas, equiparar e incluso mejorar la gestión presupuestaria descrita por Lluch por los municipios.

El diputado del PSC-PSOE, por otra parte, reiteró su apoyo a los pactos autonómicos de su parte con el Gobierno y a la figura del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). Aunque añadió que no estaba de acuerdo con los proyectos que se habían adjudicado al fondo, por entender que eran meras descentralizaciones de competencias que ya estaban previstos en los distintos departamentos. Acusó duramente al Gobierno de falta de política regional y de estar fomentando con su actitud los agravios entre las distintas regiones.